

Además, vale la pena señalar que no todas las prácticas significativas han sido fomentadas por medio de campañas educativas: la recuperación realizada por el sector popular no se ha apoyado en campañas para convencer a los más pobres de reciclar, y, sin embargo, se practica en condiciones discutibles, como se analizará más adelante. Las cooperativas tampoco han conseguido los "contratos en la fuente" por medio de campañas hacia el público, sino por contactos y negociaciones directas. Los efectos demostrativos se logran de maneras diversas, siendo importante la puesta en marcha de sistemas visibles y convincentes.

6.3.6 *Actitudes de municipios y funcionarios del aseo y la participación comunitaria*

Relación del personal municipal con el aseo y el reciclaje

En la mayoría de los municipios colombianos, el manejo de los residuos no es prioritario ni existen empresa de aseo ni recursos humanos y materiales correspondientes a las exigencias técnicas del sector. Hasta principios de los años noventa, poco se conocía sobre la magnitud del reciclaje entre los responsables del aseo de la mayoría de los municipios; todavía actualmente se percibe como una actividad paralela, perturbadora para el sistema de aseo o para la disposición final y, por su carácter actual privado e informal, se considera no articulada y no articulable con el servicio público.

Aunque muchos operarios y responsables operativos de servicios de aseo siguieran teniendo algunas actividades de reciclaje -de manera espontánea y en contra de los reglamentos- para generarse un sobresueldo, el reciclaje y la minimización de residuos no se integran a las políticas municipales de aseo. Las empresas de aseo se declaran en contra del reciclaje informal por considerarlo sinónimo del desorden urbano representado por las bolsas abiertas y regadas, por botaderos clandestinos fruto de la segunda selección o por escombros invadiendo el espacio público.

Sin embargo y según un estudio del DNP sobre los programas electorales de la campaña de 1994, más de la mitad de los candidatos a las alcaldías presentaron propuestas de campañas para la creación de rellenos y sistemas de reciclaje. Pero, si bien los alcaldes son, en primera instancia, más sensibles al problema de limpieza de la ciudad, rápidamente se dan cuenta que los sitios para ubicar los rellenos son limitados, que hay que prolongar la vida útil de estos y que hay que darle una oportunidad de trabajo digno a los recicladores que recuperan en el sitio de disposición final.

Desde principios de los años noventa, muchos elementos del contexto de la prestación de los servicios públicos han evolucionado: el nuevo escenario de la Constitución de 1991, los avances de la descentralización, las nuevas reglas del juego relativas a la participación comunitaria en la planificación nacional y local, la veeduría popular, permiten superar la visión de las entidades estatales que no la concebían sino como una forma de abaratar las inversiones con un aporte de mano de obra gratuita requerido por la insuficiencia de las inversiones públicas. A lo largo y ancho del país, se han realizado una gran cantidad de obras en las últimas décadas incorporando esos aportes de mano de obra. De la misma manera, la vivienda popular se ha ido consolidando por medio de la autoconstrucción. Con el nuevo escenario constitucional, esta "tradición" evoluciona hacia una mayor participación en la planeación y un mayor reconocimiento de la comunidad.

El nuevo contexto constitucional y la participación comunitaria

Con la nueva Constitución, se han ido renovando las formas de representación de los barrios populares frente a las entidades públicas con su tradicional forma jurídica, la Junta de Acción Comunal (JAC). Las JAC, dedicadas históricamente a solicitar la prestación de los servicios públicos y los equipamientos urbanos para las zonas marginadas, estaban afectadas por un grave desprestigio, en especial por su manejo clientelista. Paralelamente, se había visto la multiplicación de servicios sociales prestados esencialmente por grupos de mujeres: comedores populares, jardines infantiles, centros de salud, cuidados para ancianos, ayuda escolar para los niños, tiendas comunitarias, etc.

La transformación social y cultural iniciada por la nueva Constitución de 1991, introdujo nuevos espacios de participación y concertación entre el Estado y el ciudadano. En el primer estatuto orgánico de Bogotá, por ejemplo, las empresas de servicios públicos dejan de tener a los concejales en su Junta Directiva y la Junta deja de atribuir contratos y de nombrar el personal; de esta manera, se corta una importante fuente de clientelismo y de corrupción. En cambio, se introduce la figura de representantes de la comunidad: ONGs, grupos comunitarios o ligas de usuarios encuentran un canal para plantear nuevas políticas generales de la empresa. Así, en la Junta Directiva de la EDIS, tuvo asiento una representante del sector solidario y comunitario durante 1993 y 1994.

Pese a que no se han podido estudiar sistemáticamente los resultados de las propuestas ciudadanas en otros espacios nuevos, tales como los consejos territoriales de planeación, a nivel municipal y departamental, se dispone de testimonios parciales que muestran que en más de una ciudad los ciudadanos participantes han introducido propuestas de manejo integral de los residuos sólidos

con criterio social y ambiental. Ello figura también en los comentarios sobre el Plan Nacional de Desarrollo que elevara el Consejo Nacional de Planeación.

Contratación comunitaria de servicio de aseo y reciclaje

A partir de mediados de la década de 1980, aparece la figura de contratación de mano de obra comunitaria para servicios de aseo por parte del municipio. Se analizan a continuación los ejemplos de las ciudades de Medellín, Cúcuta, Guarne (Antioquia) y Ciudad Verde (Manizales).

Medellín

En esta ciudad, la recolección se hace actualmente a través de las juntas de acción comunal y otras formas asociativas para cubrir progresivamente una población de 160.000 personas que pagaban el servicio con la cuenta del agua pero no lo recibían (10% de la población de la ciudad). Estos grupos están encargados de recoger la basura desde las zonas altas carentes de vías de acceso hasta las vías donde los vehículos de la empresa los pueden recoger; la recolección se hace con carretillas o costales cargados al hombro. De esta manera, se generaron 49 empleos para atender 75% de las zonas de difícil acceso. La gerencia de aseo de las Empresas Varias propone articular estos contratos con programas de protección ambiental de microcuencas; al establecer coordinaciones con otras dependencias, se podría lograr la protección de quebradas con la defensa de senderos en torno a los cuerpos de agua (controlando el vertimiento de basuras domésticas en ellos), e iniciar acciones de reciclaje de materias orgánicas e inorgánicas como, por ejemplo, las jornadas juveniles realizadas en el Barrio 13 de Noviembre o el cultivo de lombrices con 500 familias en Villa Tina.

Cúcuta

En 1995, las Empresas Municipales han firmado 17 contratos de recolección de basuras, barrido de calles y mantenimiento de vías con 9 cooperativas, grupos comunitarios, conjuntos habitacionales y personas particulares. Algunas cooperativas participan en ambos servicios y otras solamente en recolección; entre las primeras, se encuentran dos cooperativas de ex-recicladores de uno de los antiguos botaderos, una cooperativa de familiares de trabajadores de EMCÚCUTA y cuatro grupos comunitarios barriales compuestos de personas desempleadas y empobrecidas por la crisis económica venezolana. Los contratos están destinados, sobre todo, a atender zonas de difícil acceso; tres de ellos se han realizado impulsados por las actividades del componente de saneamiento del Proyecto

Colombo-Alemán de Atención Primaria en Salud del Ministerio de Salud, a través de Norsalud y con la asesoría de la GTZ. El proyecto consiste en el montaje de microempresas de recolección manual y transporte de basuras domésticas en barrios marginados en Cúcuta y Los Patios; en general, los operarios son habitantes de las comunidades donde prestan el servicio, están equipados de triciclos y vehículos de tracción humana, recolectan la basura en forma domiciliaria, la transportan hasta puntos de transferencia y, luego, la llevan en vagones remolcados por tractores hasta el relleno sanitario.

Dos de las tres cooperativas atienden a unos 10.000 usuarios (50.000 habitantes) y la tercera a 7.000 usuarios (35.000 habitantes). La creación de empleos originada por estos contratos es la siguiente:

Cuadro 6.19
Personal beneficiado por contratos de la EMCÚCUTA para
aseo, barrido y mantenimiento de vías

Grupo contratante	Numero empleos
COOASEAR (dos contratos)	21
JAC PERACOS	11
PRECOOASOMACONS	5
INMOBILIARIA HABITAR	8
COINARPRO	4
RECOOSAC (dos contratos)	19
PRECOORIENTE	13
CORPOCERO	5
PRECOOPERATIVA CIUDADELA LA LIBERTAD	14
PRECOOSANORS	12
ASOEXRES	7
ASONORMIN	14
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO	6
OMAR RIVERA	8
SEGUNDO FUENTES	10
<i>Total</i>	<i>157</i>

Fuente: Documento "Actividades del Departamento de Aseo de las Empresas Municipales de Cúcuta". 1995.

Otros contratos están en curso con diferentes JAC, siendo la planta total del Departamento de Aseo de unas 67 personas (incluyendo el personal administrativo

y 24 conductores). Esta delegación de funciones al sector comunitario y solidario es bastante considerable; merced a estos contratos, la cobertura de recolección de basuras pasa de 75% (en 1991, según ASEAS) a una cobertura actual de 83%, según el informe de actividades del Departamento de Aseo de las Empresas Municipales de Cúcuta en 1995. El total de desechos recibidos por el nuevo relleno abierto en abril de 1995 es de unas 240 tn/día, de las cuales 208 tn provienen de Cúcuta. La tarifa de la disposición en 1995 es, en promedio, de \$Col 3.108 por tonelada dispuesta.

Guarne (Antioquia)

La Administración Municipal contrata a la Cooperativa Recuperar, a través de su sede de Guarne, para prestar el servicio completo de aseo, barrido de calle, recolección de basuras en el área urbana y algunas veredas y disposición final en el relleno Curva de Rodas de Medellín desde agosto de 1990. De esta manera, se generaron 12 empleos. La recolección se hace por medio de una volqueta, lo cual permite a un reciclador (además de los tres operarios y el conductor) separar materiales directamente en la volqueta, con los siguientes resultados:

Cuadro 6.20
Resultados del contrato de aseo en Guarne, Antioquia

Producción	1993	1994
Total recolectado	1.424 tn	1.605 tn
dispuesto relleno	1.087 tn	1.304 tn
recuperado	114 tn	135 tn
compostado (experimento)	-	8 tn
otras formas	129 tn	5 tn
Recolección Julio 1995	150 tn	
Recuperación Julio 1995	13 tn	
Costos 1995	Medellín (EE.VV.)	Guarne (contrato Recuperar)
Barrido (\$Col/km)	\$Col 11.800	\$Col 4.263
Recolección (\$Col/tn)	\$Col 49.650	\$Col 12.545

Fuente: Germán Jaramillo. Ponencia a la Segunda Conferencia Latinoamericana de ONGs de Medio Ambiente, Rhudo. Quito, Ecuador, Agosto de 1995. Y entrevista con Armando Montoya, Recuperar.

Las cifras de costos ilustran, a pesar contarse con escalas distintas en las dos ciudades, sobre la gran diferencia que separa los costos de contratación con una empresa cooperativa de los que se generan mediante la prestación directa por una empresa municipal. Esta es una de las razones principales que llevó al municipio a contratar con grupos comunitarios, además de las razones anteriormente descritas sobre ampliación de cobertura, participación de la comunidad y generación de empleos en los barrios atendidos.

En este sentido, la contratación con grupos comunitarios, cooperativas de recicladores y JACs no es una obra social o de caridad, sino una operación que mejora la eficacia y rentabilidad del servicio público. Este tipo de privatización se inició varios años antes promulgarse la Ley 142, impulsada por la dinámica de los grupos que ofrecieron servicios a los municipios y pudieron abrirse un espacio y ganar credibilidad. En este momento, es un tipo de privatización social que demuestra su eficacia, porque la motivación y el rendimiento de los socios-dueños de la empresa y operarios a la vez es de una naturaleza diferente a los de los empleados de una empresa oficial y de una empresa privada, entre otras razones.

Sin embargo, es necesario analizar estas experiencias y su generalización, desde otro punto de vista: parte de la diferencia de costos entre la contratación de personal de empresas comunitarias y la contratación tradicional está dada por el hecho de que, en el primer caso, no existen cargas en relación con prestaciones y provisiones sociales, quedando el trabajador desprovisto de cualquier beneficio legal en este sentido; la contratación directa o la contratación de una empresa formal, por el contrario, conlleva un mayor costo debido a que el trabajador goza de los beneficios asistenciales y laborales que le otorga la ley y mejores condiciones sanitarias y ambientales de trabajo que le protegen su salud y seguridad.

Ciudad Verde (Manizales)

En Manizales, el acercamiento a las 105 familias que recuperaban materiales en el botadero de Olivares y en las calles de la ciudad por parte de las empresas municipales, se inicia desde mediados de los años ochenta. En 1992, con el avance del proyecto de relleno sanitario, se adelantan negociaciones con las familias de Olivares sobre un "plan de transición social" para dejarles el acceso a la basura del botadero (todavía 40% de la producción de la ciudad) hasta su traslado a la planta de selección (en construcción en el relleno La Esmeralda). Algunos recicladores siguen así trabajando en un espacio reservado en Olivares, mientras que otras 46 personas de las dos cooperativas han sido contratados para la mano de obra de la recolección (la supervisión la sigue ejerciendo la empresa mixta EMAS). Por otro lado, la cooperativa Prosperar tiene otros contratos con la ciudad:

16 personas en tareas de aseo de la plaza de mercado y administración de baños públicos y 13 en el aseo de parques y barrido; además, la cooperativa tiene otras actividades que reúnen unos 95 socios. En la ciudad, existe una tercera cooperativa, CODOS (Cooperativa de la Comuna 2), con unos 70 a 80 asociados, la cual hace la recolección de un sector pequeño de la ciudad con unos 30 socios.

Sin entrar aún en los detalles sobre las condiciones de vida de los recicladores, existen experiencias reproducibles y no excepcionales de contratación de grupos cooperativos, no solamente para resolver problemas sociales de pobreza en la ciudad, sino porque estos grupos se han ganado la confianza de las autoridades y prestan servicios en condiciones competitivas. Se debe cuidar, eso sí, de no convertir esta práctica en una forma de legalizar o hacer aparecer como aceptables condiciones de trabajo indignas en donde el trabajador está vendiendo parte de su salud a cambio de una posibilidad de trabajo.

Reconocimiento del impacto del reciclaje

Las Empresas Varias de Medellín, por medio de la resolución 1124 de julio de 1994, manifiestan su reconocimiento a las iniciativas del sector sin ánimo de lucro, aplicando una tarifa preferencial en el relleno (reducción de 50%) para aquellas entidades que realizan un reciclaje de más de 85% de sus materiales y emplean a más de 10 operarios. Se benefician así unas 5 entidades de la ciudad. Según un estudio de las EVM, estas organizaciones reciclan, en promedio, 87% del material movilizado por ellas; siendo la mayor de las cinco CODESARROLLO. Durante 1993, estas entidades llevaron al relleno unas 7.812 tn, lo cual permite estimar que han reciclado de diversas maneras unas 52.000 tn; tres de ellas reciclan en la fuente, por lo tanto manejan materiales seleccionados. En total, estas cinco organizaciones manejan residuos de aproximadamente unas 100 empresas generadoras de desechos en la ciudad y en Valle de Aburrá. Según estos cálculos, el reciclaje de estas entidades representaba unas 142 tn/día en 1993; suponiendo que esta cifra fuera estable según la tendencia de 1992 y 1993, el impacto sobre un relleno que recibe en 1995 unas 1400 tn/día de 13 poblaciones (de las cuales 977 son de Medellín) es bastante apreciable. El ahorro para el total de las entidades recicladoras (lo que las Empresas Varias dejan de percibir) sería, a precios de la disposición final de 1995 (\$Col 8.957 por tonelada), de cerca de \$Col 35 millones; mientras que, el relleno sanitario disminuye sus costos operativos.

Según documentos de las Empresas Varias, el ahorro para el año 1994 (con base en el cálculo de 111 tn/día recicladas por 4 de las 5 entidades en el primer semestre) fue de 29 días de funcionamiento del relleno. Complementando esta apreciación, si consideramos que en Medellín siguen existiendo los recicladores

populares en las calles del centro, con un número estimado por las trabajadoras sociales de Empresas Varias de entre 2.000 y 3.000, podemos pensar que el ahorro es aún mayor. Extrapolando al caso de Bogotá, ello representaría un total aproximado de entre 40 a 90 tn/día.

Los ejemplos descritos muestran que se ha presentado paulatinamente un cambio de actitud a nivel municipal en los últimos 10 años, con el desarrollo de experiencias de innovación social, organizativa y técnica. La privatización de servicios públicos no se concibe solamente como una transferencia de responsabilidades a intereses privados y empresariales, sino como la oportunidad de darle participación a las comunidades en la planificación, la operación y la vigilancia de la prestación. Fuera de las experiencias descritas y con base en informaciones de la Fundación Social, se pueden citar ejemplos de contrataciones de tipo social con buenos resultados en términos de eficiencia y satisfacción de los usuarios, en Popayán, Soledad, Since, Santa María (Huila), Cali y otros.

En Bogotá, las experiencias han sido más limitadas: los consorcios privados han hecho diferentes tipos de acuerdos, obligados a ellos por una cláusula de los pliegos de condiciones sugerida por FERBA (entidad mixta de promoción del reciclaje en la capital). Un consorcio ha contratado a mujeres de comunidades de bajos ingresos para el barrido; otro hizo un acuerdo en la constitución del capital social de la empresa con una cooperativa de recicladores; otro ofreció subcontratos a unas cooperativas de la Asociación de Recicladores de Bogotá, pero de manera poco ventajosa. Estos contratos o subcontratos no han sido evaluados y no han sido todos ventajosos para los interesados; en términos generales, la capital del país está todavía a la zaga en este campo. Posiblemente, en los meses próximos cambie la situación con las propuestas de reglamentación del reciclaje, la cual debería abrir mayores espacios de participación formal a los grupos organizados, a los nuevos grupos que se quieran organizar y a grupos de comunidades barriales.

6.3.7 *El reciclaje y los recicladores*

A pesar del ejemplo de Medellín, para los responsables del aseo municipal siguen vigentes muchos interrogantes sobre la rentabilidad que estas actividades de reciclaje pueden tener para la empresa, sobre las diferentes maneras de articular lo uno y lo otro, sobre las inversiones necesarias, sobre la forma de acabar con la oposición entre el aseo y el reciclaje y la minimización de residuos.

De la recuperación a la transformación

En Colombia, el reciclaje es realizado por una cadena totalmente paralela al servicio de aseo: esa cadena empieza por el recuperador informal o la empresa de recuperación (en particular para el sector del cartón y de la chatarra), luego sigue con los comerciantes encargados del acopio y termina en la industria pequeña y grande. En el caso del cartón, la recuperación popular callejera representa más la mitad del mercado según estimaciones de Smurfit-Cartón de Colombia. Se puede decir que, en este caso, el alto nivel de reciclaje que caracteriza al país parte de una alianza contradictoria entre la extrema pobreza de quienes están en su origen y el consumismo, representado por los nuevos empaques o las nuevas modas de papeles sofisticados. A falta de una organización formal articulada al sector de aseo, se desarrolló la recuperación como la actividad de los más pobres, inicialmente en los botaderos y, cuando se cerraron estos en algunas ciudades, en las calles, abriendo las bolsas en la vía pública.

En su forma actual, el sistema descansa en las condiciones infrahumanas de recuperación de bolsa en bolsa, al margen de la legalidad y la legitimidad social, haciendo larguísimos recorridos por toda la ciudad y sufriendo la persecución de las autoridades, las presiones del tráfico automotor y hasta las operaciones de "limpieza social" (asesinatos de pobladores de la calle). Existe cierta jerarquía entre las diferentes clases de recuperadores según el medio de transporte utilizado; éste define la capacidad de carga y de recolección: los más pobres llevan un simple costal al hombro, la mayoría -en Bogotá- usan un carro de ruedas de balineras empujado con fuerza humana, algunos usan una carreta con caballo -la "zorra"- o una carreta empujada manualmente. Algunas cooperativas disponen de vehículos motorizados.

En los centros urbanos, el reciclaje es también una actividad del "rebusque" para quienes no encuentran más posibilidades de sustento. Parte de la población de la calle encuentra en él una alternativa eventual de generación de ingreso porque el libre acceso a las basuras, a pesar de la interdicción de la ley (del Código Sanitario, en particular), deja una puerta abierta a quienes no tienen otra posibilidad de ganarse el sustento. Este tipo de recuperadores puede cambiar frecuentemente de actividad, cuando se presentan mejores oportunidades, por ejemplo como vendedores ambulantes o en la construcción.

Las bodegas de los intermediarios que compran el material se encuentran generalmente en el viejo centro de la ciudad, en zonas degradadas física y socialmente. Parte de los recuperadores son muy cercanos a la población de la calle, sobre todo en las grandes ciudades, y viven en estos mismos sectores en

condiciones de extrema miseria; son asimilados por el público y por las autoridades a los "indigentes" y, como tales, son rechazados y agredidos (también se ha usado la palabra "desechables" para señalarlos y justificar las agresiones). Algunos tienen vivienda pero duermen a menudo en el carro, para alcanzar llenarlo en un solo viaje de varios días; otros pueden tener este oficio pero viven en barrios populares, céntricos o periféricos. Aquellos que trabajan en los botaderos pueden vivir en inmediaciones del botadero o también en barrios populares totalmente distintos.

Según diferentes estimaciones (Red Nacional de Solidaridad, Fundación Social, Asociación Nacional de Recicladores), habría unas 50.000 personas viviendo de la recuperación en el país; de éstas, unas 10.000 lo hacen en Bogotá. Estas cifras no son fáciles de comprobar porque se trata a menudo de población flotante y de una actividad de "rebusque". El trabajo asocia a menudo a grupos familiares y de socios o amigos; el número de niños y mujeres está en aumento, pudiendo representar 30 a 40% de la población de recuperadores.

Los recuperadores callejeros que logran estabilizarse consiguen "fuentes", es decir, sitios en los cuales les entregan material seleccionado o en los cuales los dueños los dejan entrar y seleccionar los desechos reciclables a cambio de algún trabajo de aseo. Así, bancos, centros comerciales, instituciones, comerciantes independientes hacen tratos con recicladores y algunas cooperativas logran trabajar únicamente en fuentes, dejando por completo el trabajo en la calle y mejorando sustancialmente sus condiciones de trabajo, aunque no automáticamente sus ingresos.

Según el estudio de ENDA AMÉRICA LATINA en Bogotá (que representa entre 30 y 50% del mercado nacional de desechos), se recuperan anualmente los siguientes volúmenes:

Cuadro 6.21
Recuperación de materiales en Bogotá

Material	Volumen recuperado (estimado en 1992)
Vidrio	50.000 tn
Metales	100.000 tn
Cartón y papel	120.000 tn
Plásticos y otros	20.000 tn
<i>Total</i>	300.000 tn

Fuente: Estudio sobre los circuitos de reciclaje de desechos sólidos en la ciudad de Bogotá. John Jairo González, María Amparo Cadena y Marie Dominique de Suremain, ENDA AMÉRICA LATINA-IRCWD, Bogotá, 1994.

Esta cifra representa 820 tn/día incluyendo el mercado de la chatarra; sobre una producción estimada total de 5.200 tn/día, esto representa 15%. La repartición entre los diferentes circuitos es la siguiente:

Cuadro 6.22
Circuitos de recuperación en Bogotá, 1992

Circuito	Volumen recuperado (Promedio diario en 1992)	
Recuperadores populares	340 tn/día	41 %
Trabajadores EDIS	80 tn/día	11 %
Empresas (incluye chatarreros)	400 tn/día	48 %
<i>Total</i>	820 tn/día	100 %

Los recuperadores venden la mayor parte de sus materiales a intermediarios, quienes realizan un acopio y a su vez revenden a grandes empresas. Para la mayoría de los materiales existen unas pocas empresas de gran tamaño que dominan el mercado; sin embargo, existen también muchas microempresas, en particular en las ramas del plástico y de la fundición cuya supervivencia depende en gran medida de las fluctuaciones del mercado.

La organización de los recicladores

La organización de los recuperadores y los programas de dignificación de su oficio se han iniciado por parte del Departamento Administrativo de Cooperativas (DANCOOP), el IPC (Integración y Participación de la Comunidad) de la Presidencia, y algunas ONGs desde 1986. En ese entonces, se cierran algunos botadero y se planean algunos rellenos sanitarios; nace Recuperar en Medellín con un apoyo importante del Municipio en el marco de un programa social de recuperación del barrio Moravia, el cual rodeaba la "Montaña" de basuras en medio de la ciudad. Esta cooperativa se vuelve el modelo ideal, pero difícil de alcanzar porque las demás cooperativas raras veces logran algún patrocinio oficial, salvo aquellas financiadas a pequeña escala y modestamente por el IPC. Recuperar crece rápidamente al desarrollar un sistema de reciclaje en la fuente y, sobre todo, con el ofrecimiento de servicios de aseo, administración de baños, manejo de excedentes en fábricas, recolección de basuras en zonas de difícil acceso, etc. A finales de 1994, Recuperar tenía 756 asociados (460 mujeres -61%- y 296 hombres -39%-). En 1995, tenía cerca de 900 empleados incluyendo el personal no asociado.

En 1990, posteriormente a estas primeras fundaciones, la Fundación Social apoya la creación de la Asociación de Recicladores de Bogotá con varias cooperativas y, en 1991, nace la Asociación Nacional con 40 grupos. Poco a poco, el movimiento ha ido creciendo el país, se van afiliando grupos y cooperativas y se crean unas siete regionales. Actualmente, existen aproximadamente 78 grupos afiliados y 90 a 100 grupos organizados en todo el país. Se estima que la ANR tiene afiliados a casi 10% del total de recuperadores existentes a nivel nacional.

En 1995, la ANR y la Fundación Social han realizado una encuesta entre los miembros afiliados para actualizar el censo; entre los 45 grupos que han contestado hasta septiembre del mismo año, los resultados son los siguientes:

Número de socios de los 40 grupos que respondieron esta pregunta: 1.292.

¿Tienen socios que hacen recuperación?

-	En sitios de disposición final	23 grupos	51%
-	En la calle	19 grupos	42%
-	En la fuente	27 grupos	60%
-	Total	45 grupos	100%

Las respuestas superiores a 100% se deben al hecho de que 21 grupos recuperan en un más de un sitio; sólo 19 recuperan en un solo sitio, en la fuente o en el sitio de disposición final. No hay cooperativas compuestas únicamente por recicladores callejeros.

Los grupos *comercializan* con:

- Intermediarios	33 grupos	73%
- Directamente con industrias	26 grupos	57%
- Con otros recicladores	15 grupos	33%

De la misma manera, la mayoría de los grupos comercializan con más de un tipo de empresa. Las tres cuartas partes no ha logrado separarse del todo de la dependencia de los intermediarios, pero más de la mitad ha accedido a ventas directas con industrias.

Grupos que *prestan servicios* de aseo, barrido y recolección de basuras al municipio: 21 grupos 45%

Hay que señalar que algunos grupos trabajan además con el relleno sanitario: en Ibagué y El Carmen de Viboral.

Tienen proyectos funcionando de *transformación*

- De la materia orgánica	5 grupos
- De plástico	4 grupos
- De papel	2 grupos
- De vidrio	2 grupos
- De metales	2 grupos

En esto, se debe resaltar la cooperativa Nueva Esperanza de Popayán por el hecho de transformar 4 materiales diferentes.

Estas cifras dan una idea de la variedad de actividades llevadas a cabo por los socios de la ANR. En sus primeras etapas, la aspiración principal era la de estabilizar los precios, lograr una comercialización mejor por volumen y más directa al eliminar los intermediarios. Con el tiempo, estas actividades se han diversificado y los grupos más adelantados han entrado al mercado de la prestación de servicios

siguiendo el ejemplo de Prosperar en Manizales y de los pioneros de Recuperar. La especialización por materiales de algunas cooperativas ha permitido abrir mercados mayores, aunque la situación haya sido difícil durante algunos años.

Los adelantos y la credibilidad adquirida por las cooperativas de la ANR les han permitido crear una empresa de servicios públicos con las utilidades generadas por el proyecto de Chiquinquirá. Con la ARB y el grupo de Chiquinquirá, se asociaron otras cooperativas de Ibagué, de la Costa, de Manizales, de Palermo y La Plata (Huila). El capital actual es de \$Col 73 millones y se está ampliando a \$Col 150 millones, invitando a más grupos. Algunas sucursales están en creación en San Gil, Chía, Quibdó, Melgar y Valle.

Estos modelos son importantes a la hora de poner en aplicación las directrices del CONPES de Política Ambiental de diciembre de 1994, el cual recomienda el impulso a las empresas solidarias de servicios públicos. Se trata de abrir las puertas de la contratación municipal a grupos barriales y a recicladores para prestar servicios de manera eficiente y participativa. En estos modelos, la comunidad tiene que beneficiarse de los empleos creados y ser veedora de la calidad del servicio.

En este mismo espíritu, la Red Nacional de Solidaridad plantea crear programas en 19 ciudades para apoyar las actividades económicas y educativas de los recicladores o reubicarlos en actividades alternativas. El programa debe empezar a finales de 1995 con la conformación de un comité técnico nacional y, en 1996, se instalarán los comités locales para seleccionar proyectos a financiar. Este programa tendrá seguramente un impacto fuerte en el sector y en su activación económica y social; por lo tanto, es necesario establecer una coordinación con los ministerios de Salud, de Desarrollo y de Medio Ambiente para focalizar los recursos en forma coherente.